

RUC: 2001236893-4

RIT:235-2022

Ministerio Público / DANIEL ALEJANDRO RAMÍREZ BRUNA

Homicidio simple.

Santiago, cinco de diciembre de dos mil veintidós.

VISTO:

PRIMERO: Tribunal e intervinientes. Que, ante la sala del Segundo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, presidida por la jueza **Denisse Ehrenfeld Ebbinghaus** e integrada por la jueza **Pamela Quiroga Lorca** y el juez **Eduardo Gallardo Frías**, los días 28. 29 y 30 del año en curso se verificó el juicio oral en causa RUC: **2001236893-4**, RIT: **235-2022**, seguida contra el acusado **DANIEL ALEJANDRO RAMÍREZ BRUNA**, cédula de identidad N°19.340.414-6, nacido el día 11 de enero de 1996 en Santiago, soltero, con domicilio en Boulevard Los Cóndores 4101, Valle Grande, comuna de Lampa.

Fuer parte acusadora en el juicio el Ministerio Público representado por el fiscal do **Ulises Berríos Tapia** y en representación del acusado litigó el defensor penal público, don **Patricio Cofré Soto**.

SEGUNDO: La acusación formulada por el Estado fue la siguiente:

Los Hechos:

“El día 8 de diciembre del 2020, siendo las 18:00 horas aproximadamente, mientras la víctima Carlos Alberto Barraza Martínez, se encontraba en la intersección de las calles Manuel Bustos con Santa Laura de la comuna de Quilicura, fue abordado por el acusado DANIEL ALEJANDRO RAMÍREZ BRUNA, quien portaba un elemento cortante tipo cuchillo con el que le propinó dos puñaladas al ofendido, una en la zona cervical y la otra en la zona torácica, las que finalmente le provocaron la muerte”.

Sostuvo el Ministerio Público que los hechos descritos precedentemente constituyen un delito de HOMICIDIO SIMPLE, descrito y sancionado en el artículo 391 N°2 del Código Penal, en grado de consumado.

Al acusado se le imputó participación en calidad de autor en todos los hechos, de conformidad a lo previsto en el artículo 15 N° 1 del Código Penal, toda vez que ejecutó los hechos en forma inmediata y directa.

Con relación a circunstancias que pudieran incidir en la medición judicial de la pena, el Estado no invocó ni atenuantes ni agravantes de responsabilidad penal.

La pretensión punitiva del acusador público para el caso de condenarse al acusado **DANIEL ALEJANDRO RAMÍREZ BRUNA**, consistió en la pena de **DOCE AÑOS DE PRESIDIO MAYOR EN SU**

GRADO MEDIO como autor del delito consumado de homicidio simple, además de las penas accesorias generales previstas en el artículo 28 del Código Penal, el pago de las costas y el comiso de los instrumentos y efectos del delito

TERCERO: Alegatos de apertura.

El representante del **Ministerio Público** expuso que la fiscalía acreditará los hechos de la acusación, con testigos, fotos e imágenes de los hechos. La prueba será suficiente para establecer la responsabilidad del acusado en los hechos que se le imputan.

La **defensa** por su parte aseveró que no cuestionará los hechos de la acusación, el acusado declarará y relatará los hechos. Pedirá que se considere la declaración del acusado al momento de dictarse la sentencia.

CUARTO: Declaración del acusado. El acusado ya individualizado, advertido de sus derechos renunció a su derecho a guardar silencio declarando en los siguientes términos una vez verificados los alegatos de apertura:

Manifestó que el ocho de diciembre de 2020 estaba en la feria en Lo Marcoleta y le dijo a su hermana que iba donde su abuela a dejarle cosas a la Villa Santa Laura. Estuvo 15 minutos donde su abuela y se despidió. Fue a la botillería a comprar una cerveza, ahí estaba Ronny, lo saludó. Llegó el Carlos, su cuñado, que le habían dicho que lo andaba buscando para pegarle porque unos días antes hubo un altercado con su hermana. La había tratado mal por teléfono y por eso se lo reprochó, mal que mal era su hermana. En la botillería como a las cinco de la tarde Carlos llegó con prepotencia, lo amenazó. Pescó una regla de metal para pegarle, le pegó en la cabeza, y el acusado tiró un puño con el cuchillo, por nervios y por miedo. Después lo vio tirado ahí y le dijo “cuñado no te podís morir, levántate”. Había tomado dos latas de cerveza, igual lo quería, habían vivido juntos. Trató de hacerle reaccionar. Salió la dueña del local, Liliana, y le dijo que fue una pelea. La gente se le fue encima y se tuvo que arrancar, tuvo mucho miedo en ese momento. Lo único que quería es que Carlos no se muriera, lo conocía, era impulsivo y agresivo, pero no merecía morir. La familia de él le tiró el auto encima, lo iban a secuestrar. Pero gracias a Dios está vivo. Anduvo vagando en las calles, tratando de sobrevivir, le pidió ayuda a Dios, quiso arrebatarse la vida porque le había quitado el papa a su sobrina, hija de su hermana. Acudió a un centro de rehabilitación, porque su padre lo rechazó. Un vecino que no conocía lo ayudó.

A la **defensa**, dijo que su apodo era el “Cloro” o “clorito”. La víctima era Carlos Barraza, le decían el “Tuta”. Con el Tuta no tenían mucha comunicación, era muy cambiante. Siempre había discusiones entre Carlos y su hermana, él era su cuñado, el papa de su sobrina. Él era agresivo, celoso, por eso le tenía miedo. Carlos tenía casi 40 años, se agarraba hasta con los carabineros. Después de acuchillarlo, el chuchillo lo tiró por el pasto. El cuchillo estaba ahí, donde sucedieron los hechos. Tenía como 4 dedos de hoja más el mango.

Los familiares del Tuta trataron de atropellarlo y por eso le cayó un árbol encima a su pareja. Ella le contó todo a la PDI, pero no la pescaron mucho. La víctima le pega con una regla metálica y él se cubre la cara y él le pega con el cuchillo, y cuando el Carlos le dijo “me pasaste a llevar”, se asustó y le tiró otro cuchillazo.

Al **fiscal** dijo que le pegó dos veces con el cuchillo, la primera en el cuello y la segunda no recuerda en que parte. Trató de auxiliarlo, pero tuvo que salir corriendo porque los vecinos salieron a pegarle. El andaba con un buzo y polera de color negro. El cuchillo lo tiró en el pasto, en un pasaje. La hoja era de cuatro dedos, 8 o 6 centímetros. Un cuchillo chico. En la noche se enteró que el Tuta había fallecido. No se entregó a la policía cuando supo que el Tuta murió, tenía miedo porque lo podían matar. La Policía de Investigaciones (PDI) lo detuvo en junio de 2021 en Cartagena de Indias 1112, Quilicura.

QUINTO: Prueba de cargo. Con la finalidad de acreditar las premisas fácticas de la hipótesis acusatoria, el Ministerio Público rindió las pruebas que a continuación se indican y describen de manera sintética:

a) PRUEBA TESTIMONIAL

1. Declaración del testigo don CAMILO BURGOS CANCINO, Cabo 2° de Carabineros de Chile, domiciliado en Cabo Primero Carlos Cuevas Golmos N° 526, comuna de Quilicura.

Al **fiscal** dijo que el 8 de diciembre de 2020 estaba de servicio de población con el cabo Illanes en un vehículo Z8275. Cerca de las 18 horas iban por Rigoberto Jara y al llegar a calle Egipto, en Quilicura, fueron alertados por una persona que indicó que en Rigoberto Jara había una persona herida. Al llegar unas personas ingresaban a un sujeto a un vehículo para trasladarlo al SAPU Marta Ugarte. Fueron al SAPU, consultaron por la persona que ingresó lesionada, entrevistándose con doctora la Cardona, que les dijo que a las 18:20 ingresó un hombre adulto sin signos vitales. Ubicaron al conductor del vehiculó que trasladó al occiso. Se llamaba Patricio Valencia, quien les dijo que vive cerca de donde se encontraba esta persona. Cuando vio una aglomeración de gente, vio al lesionado en el suelo, volvió a su casa, sacó el auto y lo trasladó. Dieron cuenta a la fiscalía.

Fiscal exhibe algunas fotos del set fotográfico contenido en el número seis de otros medios de prueba del auto de apertura, compuesto por 51 fotografías, contenido en el informe pericial fotográfico N°37/021:

Foto 26, correspondiente a la botillería en cuyo exterior estaba la persona lesionada.

Foto 27, correspondiente a la señalética de la intersección Santa Laura con Manuel Bustos.,

Foto 28, misma intersección, donde estaba la persona lesionada al momento de que se le sube al vehículo, se ve un grifo amarillo.

Foto 30, mismo grifo, con manchas de sangre.

Foto 31, mismas manchas en el suelo, ahí habría sido recogida la persona lesionada.

Foto 34, vehículo en el cual se trasladó al occiso, es blanco.

Foto 36, patente de dicho vehículo, FXZF 42

Foto 40, interior del vehículo con una polera ensangrentada celeste en la parte trasera.

Foto 41, se aprecia misma polera, celeste, con manchas rojas.

Foto 42, la misma polera, con sangre.

La Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se hizo cargo de la investigación, refirió el testigo.

2. Declaración del testigo don HECTOR ILLANES ORMEÑO, Cabo 2° de Carabineros de Chile, domiciliado en Cabo Primero Carlos Cuevas Golmos N° 526, comuna de Quilicura.

Dijo al **fiscal** que el 8 de diciembre de 2020 estaba de servicio de patrullajes con el cabo segundo Burgos, cuando le indican que había un lesionado en la vía pública. Llegaron y vieron que ingresaban a un sujeto a un vehículo para llevarlo a un centro asistencial. En el centro asistencial, Burgos tomó declaración al médico de turno y a él fiscal instruyó el trabajo de la Brigada de Homicidios de la PDI se hiciera cargo de las diligencias. Al sujeto lo llevaron al CESFAM Marta Ugarte, que también funcionaba como Servicio de Atención Primaria de Urgencia (SAPU). El SAPU Rodrigo Rojas Denegri estaba transitoriamente cerrado.

A la **defensa** indicó que la fiscalía le ordenó que tomaran declaración a médico de turno y a testigos, concretamente al propietario del vehículo en que trasladaron a la víctima, que era don Patricio.

3. Declaración del testigo don JAVIER CAMPOS MORALES, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, domiciliado en Williams Rebolledo N°1717, comuna de Ñuñoa.

Manifestó al **fiscal** que el 8 de diciembre se encontraba de turno de la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana y en la noche la fiscalía les instruye hacerse cargo de un procedimiento por homicidio en Quilicura. Se concurrió con personal de LACRIM, un médico forense y otros funcionarios al SAPU de Quilicura. El occiso era Carlos Barraza Martínez, quien ingresó ese día a las 18.22 horas, ya fallecido. El médico forense detectó tres heridas cortopunzantes, señalando que la muerte fue causada por heridas cortopunzantes de carácter cervical y torácica., Levantaron evidencia y muestra de hisopado bucal de la víctima. Luego concurrieron al lugar del hecho, en la vía pública en Manuel Bustos con Santa Laura, Quilicura. Su fijo el sitio del suceso fotográficamente y se levantaron muestras pardo rojizas en la calzada en calle Manuel Bustos y, además, una polera al interior de un vehiculó blanco, con manchas pardo rojizas y desgarraduras. Se realizó empadronamiento a vecinos, algunos de los cuales decían que el fallecido era el Tuta y que lo había apuñalado un ex cuñado de nombre Daniel. No participó en toma de declaraciones de testigos, pero leyó esas declaraciones porque confeccionó el informe policial. Dichos testigos fueron Patricio Valencia, Nardo Díaz, Erik Labrín Agüero, Jennifer San Martín Jara, Michelle Jorquera Benavides y Liliana Valencia.

Lograron con la ex pareja de imputado, obtener la identidad de Daniel Ramírez. Se confeccionaron dos set fotográficos y a los testigos interrogados (salvo a Patricio Valencia) se las exhibieron y todos lo reconocieron, manifestando que lo conocían como Daniel o el Cloro. Para ubicarlo se recurrió su red familiar, realizando en esos domicilios entradas y registros en Quilicura, pero sus familiares no tenían conocimiento del paradero del sospechoso.

También se levantaron cámaras de seguridad en la botillería de Manuel Bustos, en las que se logra apreciar el tránsito del imputado con la víctima. En la dinámica del video se logra detectar que el imputado vestía una polera negra con un cuchillo que guarda en su bolsillo posterior y, también, se divisa a la víctima con polera celeste, lo que coincidía con descripciones efectuadas por la testigo Jennifer San Martín. Al imputado lo detuvieron el 2 de junio de 2021, lo que le correspondió materializar –señaló el testigo- en el inmueble de Cartagena de Indias 1112.

En relación con la polera de que vestía la víctima, se encontró en el vehículo blanco de Patricio Valencia, quien trasladó al lesionado en dicho vehículo al centro asistencial.

En las grabaciones que recogieron, se observa que el imputado vestía una polera negra y que llevaba arma tipo cortante que guarda en el bolsillo posterior.

Fiscal exhibe video de cámaras de seguridad del local de Manuel Bustos 407 (la botillería), contenido en el número nueve de otros medios de prueba del auto de apertura. En el video se observa a la víctima desplazándose con manchas de sangre en la parte posterior de polera celeste, aparentemente con dolor y molestia. En otra toma de las cámaras, pasa caminando hacia el poniente la víctima levantándose la polera y aparentemente lesionada. En otra, el imputado se saca un jockey, lleva en su mano un elemento cortante, observa alrededor y guarda el cuchillo en el bolsillo posterior, caminando al poniente por Manuel Bustos. Luego entra el cliente que según Liliana Valencia le dijo que había una persona afuera.

A la **defensa** señala testigo que no recuerda si Nardo Díaz vio al acusado con un cuchillo, tampoco si Erik Labrín vio al acusado golpear a la víctima con un cuchillo y que la testigo Michelle Jorquera habría alcanzado a ver al acusado con un cuchillo guardado en el bolsillo posterior, pero no ve la agresión y Liliana Valencia tampoco lo vio directamente.

4. Declaración del testigo don RICARDO GÓMEZ POBLETE, Inspector de la Policía de Investigaciones, domiciliado en Williams Rebolledo N°1717, comuna de Ñuñoa.

Expresó al **fiscal** que realizó las siguientes diligencias: presencié dos declaraciones de testigos y tomé otra. Los funcionarios a cargo eran Vicente Torres y Javier Campos. También analizé grabaciones del sitio del suceso, en la botillería frente a la cual ocurrieron los hechos. Hizo un fotograma a partir de esas grabaciones.

5. Declaración del testigo doña CYNTHIA CONTRERAS HERRERA, Subinspector de la Policía de Investigaciones, domiciliada en Williams Rebolledo N°1717, comuna de Ñuñoa.

La testigo dijo al **fiscal** que en diciembre de 2020 estaba destinada a la Brigada de Homicidios (BH) Metropolitana. Señala que el ocho de diciembre de 2020 estaba de turno en la BH, debiendo concurrir al SAPU Rodrigo Rojas Denegri en Quilicura porque había un fallecido. Se hizo un grupo de trabajo con el subcomisario Torres y otros peritos. Verificaron que el occiso era Carlos Barraza Martínez y al realizar el examen del cuerpo presentaba heridas cortopunzantes en cuello y tórax. Concurrieron a Santa Laura con Manuel Bustos en Quilicura. El subcomisario Campos con Torres fijaron el sitio del suceso. Ella por su parte entrevistó a dos testigos. Uno en el sitio del suceso, Patricio Valencia, que indicó en su domicilio tenía un lavado de autos. A las 18 horas de ese día se percató que había aglomeración en Santa Laura con Manuel Bustos, se acercó y vio al Tuta y en el piso sangrado. Sacó su auto y en compañía de su esposa lo subieron y llevaron al SAPU de Quilicura. La víctima nada les dijo porque se iba desmayando. También en el sitio del suceso tomo declaración a Jennifer San Martín que dijo que ese día salió a la calle y había mucha gente, le dijeron que habían apuñalado al Tuta. Al escuchar eso recordó que a las 13 horas de ese día había visto caminando al Tuta en compañía de su Daniel y que este última le buscaba pelea al primero. La víctima vestía polera verde agua y bermudas. Dijo que Daniel era joven, bajo y vestía polera negra y pantalón oscuro. También presenció la declaración de Liliana Valencia Jara, hermana de Patricio, quien indicó que ese día cerca de las seis de la tarde estaba atendiendo en la botillería y entra una persona y le avisa que habían apuñalado a alguien. Salió y vio al Tuta en el suelo y el Cloro le movía la cabeza y como no reaccionó se fue. Agregando que tenía un cuchillo. Siempre la víctima e imputado peleaban dijo la testigo.

Con el inspector Casanueva levantaron unas cámaras en Manuel Bustos 407, una desde el interior de la botillería y otra en el exterior. En las cámaras se observaba a la víctima e imputado con las vestimentas referidas por los testigos.

Una vez que identificaron al imputado, se hicieron dos sets fotográficas con la foto del sospechoso y el comisario Campos se las exhibió a los testigos, quienes habrían reconocido al acusado.

Fiscal exhibe fotos signados en el numero tres de otros medios de prueba del auto de apertura:

Foto 1, es la visualización de la cámara externa botillería con la víctima subiéndose la polera.

Foto 2, la misma cámara, donde se observa parte la posterior de la víctima con mancha rojiza en la polera.

Foto 3, se ve que el imputado avanza y se saca el jockey que vestía.

Foto 4, se ve al acusado con polera negra y con un elemento que podría ser un cuchillo en mano izquierda.

Foto 5, se ve al imputado guardando el cuchillo en bolsillo trasero.

Foto 6, el imputado por la misma calle poniéndose nuevamente el jockey.

Foto 7, se ve a víctima avanzando por la calle con la polera enrollada hacia arriba.

Foto 8, se aprecia al imputado caminando por la calle.

Foto 9, imagen captada de la cámara desde el interior, con imputado caminando por la misma calle.

Foto 10, se observa el perfil del imputado con polera negra y jockey.

Ese día no pudieron ubicar al imputado, finalizó el testigo.

A la **defensa** dijo que empadronó a Patricia Valencia Jara y que éste dijo que no vio nada directamente como testigo presencial. También le tomó declaración a Jennifer San Martín Jara, quien manifestó que Daniel le buscaba pelea a la víctima, pero lo infería solo por su actitud, pues no escuchaba lo que hablaban.

6. Declaración del testigo don JORGE ZAMORANO SALAZAR, Subcomisario de la Policía de Investigaciones, domiciliada Gran Avenida 5254, comuna de Santiago.

Dijo al **fiscal** que en diciembre de 2020 estaba en la BH Metropolitana. El ocho de diciembre de ese año estaban de turno, se recepcionó un comunicado de Fiscalía para una concurrir al SAPU Denegri en Quilicura donde había un hombre fallecido. Participó en la confección de un informe científico técnico (examen externo del cadáver, levantamiento de evidencias y una fijación escrita con fotos para ilustrar) y actas de reconocimiento del imputado.

Fiscal exhibe set de fotografías del número seis de otros medios de prueba del auto de apertura:

Foto 5, corresponde al cadáver de la víctima en el SAPU, -al que llegaron como a las 22:00 horas-, en cubito dorsal, con una gaza en la cara. Se aprecia una lesión cortante en el tercio superior del hemitórax. El cuerpo estaba en la sala de residuos del establecimiento.

Foto 10, el rostro de la víctima, que mantenía una lesión en el cuello, de carácter cortopunzante de 3,5 centímetros de largo.

Foto 11, detalle de la lesión cortopunzante en el cuello con una cola de salida.

Foto 13, es la segunda lesión cortopunzante del hemitórax, en el tercio superior lado izquierdo.

Foto 14, corresponde a un acercamiento de la lesión anterior.

Foto 16, son las extremidades inferiores, con excoriaciones en ambas rodillas.

Foto 19, es la cara posterior del codo con excoriaciones.

Foto 22, se observa plano posterior del cadáver con pequeño corte de hemitórax posterior, tercio superior, lado izquierdo, de un centímetro.

Foto 23, corresponde al detalle de la lesión precedente.

Foto 26, intersección de Santa Laura con Manuel Bustos, en Quilicura.

Foto 27, señalética de la intersección antedicha.

Foto 30, es el grifo en Manuel Bustos en la vereda norte a los pies de la botillería con una mancha pardo rojiza en el suelo.

Foto 31, macha pardo rojiza en detalle.

Foto 34, vista del vehículo blanco BYD, en cuyo interior en la parte trasera se levantó polera celeste con mancha pardo rojiza.

Foto 38, acercamiento del referido vehículo.

Foto 41, la polera celeste al interior del vehículo con manchas pardo rojizas.

Foto 42, se aprecia la polera extraída del vehículo, extendida y con desgarraduras con manchas pardo rojizas. Las desgarraduras están en el tercio superior de la polera hacia el lado izquierdo.

Foto 44, detalle de la polera con las desgarraduras.

Foto 46, la parte posterior de la polera con las mismas características, es decir, con manchas pardo rojizas y dos desgarraduras en parte posterior.

Foto 47, la polera en cuestión con el detalle una de las desgarraduras.

Con relación a las diligencias de reconocimiento fotográfico, se confeccionaron dos sets con 10 fotos con personas de similares rasgos. Les fueron exhibidas a los testigos, primero Nardo Díaz Gómez que reconoce al imputado en foto 8 como el sujeto que venía discutiendo con otra persona, generándose una pelea. El testigo Erik Labrín del mismo set reconoce al sujeto que venía discutiendo con el fallecido, dándose a la fuga del lugar. A Jennifer San Martín, también se le exhiben las fotos y reconoce al Daniel como el que venía caminando con el Tuta (el cuñado del imputado), y que venían peleando. La testigo Michelle Jorquera también lo reconoce como Daniel o el Cloro, y que había peleado con Carlos dejándolo tendido en el suelo herido, percatándose que mantenía un cuchillo en el bolsillo posterior del pantalón, quedando la víctima tendida al lado de un grifo. Finalmente Liliana Valencia también lo reconoce como el sujeto apodado Cloro, que ese día movía la cabeza de lado a lado mientras la víctima estaba en el suelo. tomando el Cloro una polera celeste y arrojándosela, además de que mantenía un cuchillo en el bolsillo posterior del pantalón.

El imputado fue individualizado como Daniel Ramírez Luna.

A la **defensa** dijo que el testigo Nardo no refirió haber presenciado la agresión. Labrín solo dijo que el acusado golpeó en el pecho a la víctima, pero no vio si fue con un cuchillo.

7. Declaración de la testigo doña EUNICE JANNETH CARDONA RUIZ, médico, domicilio reservado.

Dijo al **fiscal** que el ocho de diciembre prestó atención médica al ofendido, en el CESFAM Marta Ugarte en Quilicura, A las 18:20 llegaron personas gritando con un paciente, el cual estaba fallecido al llegar. Estaba en funciones de SAPU ese día el referido CESFAM, porque estaban remodelando el Rodrigo Rojas Denegri. El paciente estaba con livideces generalizadas, con heridas en el tórax posterior y anterior y parte submandibular. Eran heridas penetrantes por arma blanca.

Fiscal incorpora documento número uno del auto de apertura, correspondiente al dato de atención de urgencia N° 42213 del SAPU N°1 Rodrigo Rojas Denegri, de fecha 08 de diciembre de 2020 de la víctima Carlos Alberto Barraza Martínez, el cual es suscrito y reconocido por la testigo. En dicho

documento se consigna que se inicia atención del paciente como a las 18:30 con 47 segundos “con evidencia de lividez generalizada, pupilas midriáticas arreactivas, cuello en región submandibular izquierda, herida de aprox. 3-4 cmt. de largo que involucra piel y tejido subcutáneo (...). Tórax con herida cortante en región de línea axilar anterior a nivel T2-T2 aprox. De dos CMT., sangrado escaso en región posterior a nivel de T2-T3, línea axilar posterior herida de aprox. 2 CMT., sin sangrado evidente. Rodillas con laceraciones bilateral, sin heridas cortantes...”. La testigo explicó que, en definitiva, el paciente ingresa fallecido al momento de llegar al centro asistencial y ser atendido, aparentemente producto de heridas penetrantes cortopunzantes.

8. Declaración del testigo don PATRICIO ANTONIO VALENCIA JARA, domiciliado Manuel Bustos 0407, Villa Santa Laura, Quilicura.

Manifestó al **fiscal** que el día de los hechos estaba en su domicilio lavando vehículos. Su domicilio queda a cuatro casas de lo sucedido. Escuchó gritos desde la esquina de Santa Laura con Manuel Bustos, donde tienen un local comercial que tienen los tres hermanos. Escuchó gritos y ve a su hermana tratando de socorrer a un muchacho que estaba en el suelo ensangrentado, al que conocían. Lo subió a su vehículo y lo llevó a un CESFAM, iba ensangrentado, botando espuma por su boca. Al llegar pasaron cinco minutos y le dijeron que había fallecido. El lesionado lo conocía por su apodo, el Tuta. Lo trasladó en su vehículo blanco.

Fiscal muestra fotos de set contenido en número seis de otros medios de prueba del auto de apertura:

Foto 26, se ve a un costado está el negocio familiar.

Foto 30, es el grifo amarillo frente al local comercial, Minimarket o botillería, donde el Tuta estaba botado.

Foto 38, su auto, marca BYD, patente FXZF42, color blanco, en el cual llevó al Tuta al centro asistencial.

Foto 40, el interior de su vehículo y al costado derecho del asiento trasero está la polera del Tuta.

Foto 41, la polera del Tuta.

Foto 42, la polera del Tuta.

9. Declaración del testigo don NARDO JESÚS DÍAZ GÓMEZ, domicilio reservado.

Dijo al **fiscal** que el día de los hechos trabajaba instalando una laderas en una reja de una casa particular, a los pies de la botillería. Llegaron unos muchachos y salieron corriendo para el lado de la botillería, Después le dijeron que mataron al Tuta en la puerta de la botillería. Luego se fue para la casa y la PDI le preguntó si vio algo, les dijo que no. Pero el detective vio las cámaras y le dijo que él salía ahí. No vio cuando apuñalaron al Tuta, solo cuando corrieron dos personas que estaban como jugando Estaba trabajando con madreas en calle Santa Laura cuando sucedió todo esto. A las dos personas que vio las conocía. El fallecido era el Tuta y el otro era el Clorito. Los conocía desde que llegaron a la población, como el 2000. Pero nunca había compartido con ellos. Cuando los vio ese día ellos discutían, se dirigían a la

botillería. Queda en toda la esquina de Santa Laura. Después ellos se perdieron y no los vio más, dieron la vuelta. Después le dijeron que habían matado al Tuta. La PDI le mostró fotos, le preguntó “este fue” y dijo “sí”, pero no recordaba como andaba vestido.

Fiscal exhibe otros medios de prueba número nueve, correspondiente a grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en Pasaje Manuel Bustos 407, Quilicura.

En el video, correspondiente al frontis de la botillería –refiere el testigo- se ve al Tuta cruzando por el frente de la misma, también detecta al Clorito. Luego en la calle el testigo refiere ver a un muchacho.

Investigaciones le mostró fotografías donde aparecía el Clorito.

A la **defensa** dijo que ese día trabajaba en una casa particular con otra persona, no recuerda cómo se llamaba. Cuando ve al Clorito y al Tuta caminando, no recuerda porque calle venían. Los perdió de vista cuando dieron la vuelta a la botillería. Vive en la misma comuna que ellos.

10. Declaración del testigo don ERIK ANDRÉS LABRÍN AGUERO, domicilio reservado.

Al **fiscal** expuso que el día de los hechos trabajaba y vio que estaban peleando, los sujetos doblaron en la esquina y “sucedió lo que sucedió”. Trabajaba el testigo ese día en calle Santa Laura, al lado de una botillería en Quilicura. La pelea era entre el Clorito y el Tuta.

Fiscal exhibe fotografía número 26 del set de fotografías del número seis de otros medios de prueba del auto de apertura del juicio oral, que el testigo reconoce como aquel en que está la botillería, la que queda en la esquina de Manuel Bustos con Santa Laura. .

Él estaba hacia la derecha por calle Santa Laura. Los vio peleando y llegaron a esa esquina.

Fiscal exhibe foto número 28, donde se ve la botillería, indicando el testigo que la pelea terminó afuera de la botillería frente a un grifo amarillo.

A la **defensa** dijo que solo vio empujones entre los que peleaban.

11. Declaración de la testigo doña MICHELLE DENISSE JORQUERA BENAVIDES domicilio reservado.

Dijo al **fiscal** que el día de los hechos estaba en el patio de su casa y escuchó muchos gritos, pensó que era una pelea. Gritaban “soy ajilao huevón”. Eso se lo escuchó a una vecina, la de al frente de la botillería, que se llamaba Liliana. Se lo decía al Cloro, porque cree que le tiró una polera en la cara o algo al Tuta. Salió y vio al Tuta en el piso con Liliana ayudándolo y vio a Cloro caminando hacía Santa Laura. Cuando el cloro se fue hacia Santa Laura, el Tuta empezó a echar espuma por la boca y otros vecinos subieron al Tuta a un auto y se lo llevaron. El Tuta estaba en una botillería al lado de un grifo, lo subieron con Liliana y su hermano Patricio al auto de este último.

Fiscal exhibe la foto número 28 del set de fotografías de la prueba número seis de otros medios de prueba del auto de apertura.

En dicha foto se divisa la botillería y la testigo explica que el Tuta estaba en el suelo a un costado izquierdo y el Cloro caminaba en dirección contraria.

Fiscal exhibe video número nueve, correspondiente a las grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en Pasaje Manuel Bustos 407, Quilicura, en el cual la testigo ve al Tuta con polera celeste y short negro. Lo ve también pasando desde el interior de la botillería, que la atiende su vecina, Liliana. Luego, desde el interior de la botillería, también ve al Cloro pasando por afuera.

No recuerda que policía llevó la investigación, pero lo que vio se lo contó a uno de la PDI. Le preguntaron que vio y le mostraron las imágenes, en las que reconoció al Tuta y el Cloro, los conoce porque son del sector.

A la **defensa**, indicó que la PDI le exhibió fotografías y le preguntaron si reconocía al Cloro. Al Cloro cuando lo ve caminando ve que llevaba un cuchillo que se metió un bolsillo trasero, caminando por Manuel Bustos hacía Santa Laura.

12. Declaración de la testigo doña LILIANA ELENA VALENCIA JARA domicilio Manuel Bustos 0399, Quilicura.

Dijo al **fiscal** que el día de los hechos trabajaba en la caja del minimarket y apareció un gordito gritando que apuñalaron al alguien afuera del local. Salió y a mano derecha al lado de un grifo estaba un hombre con un tajo en el cuello y cortes en su guatita, lo conocía desde la juventud. Hizo cerrar el portón del negocio para llevarlo a un centro asistencial y su hermano Patricio, que tiene un lavado de autos, pescó su vehículo blanco y dos personas lo ayudaron a tirarlo adentro del auto y Patricio salió con el hacía el SAPU. Se enteró de lo que pasaba por un cliente que entró gritando cuando ella estaba terminando su turno en la caja y gritó “están matando a una persona afuera”, ella sale y encuentra al Tuta en el suelo, a mano derecha, en las condiciones referidas. Estaba apuñalado en el suelo, con cortes en la guata y en el cuello, debajo de la oreja llegando a la manzana. Había más gente gritando. La polera del Tuta estaba botada y ella la uso para enrollársela en el cuello. Gritaban que fue el Cloro quien lo apuñaló. Ella vio al Cloro ese día cuando salió, el miraba el entorno desorientado. Luego se fue, no ayudó a subir al Tuta al auto, pues se fue caminando.

Fiscal a la testigo exhibe fotografías del set de fotos de la prueba número seis de otros medios de prueba del auto de apertura:

Foto número 26, corresponde a su local, un local verde. Al Tuta lo encontró en el suelo, al lado del grifo amarillo. La calle paralela es Santa Laura, el Cloro solo estaba ahí parado mirando antes de irse.

Foto número 28, corresponde a su negocio, visto desde el exterior.

Fiscal exhibe video correspondiente a la prueba número nueve de otros medios de prueba, donde se ve al Tuta con la polera turquesa o celeste.

Esa cámara –explica la testigo- estaba enfocando hacia abajo, la tiene en la parte externa del local. Luego se registra una toma desde el mesón del negocio de la testigo, que enfoca hacia el exterior, donde la testigo ve al Cloro pasando y al cliente que le avisó que estaban matando a alguien afuera. Se divisa también a la testigo saliendo hacia el exterior.

Cuando el Tuta falleció, después la PDI le pidió autorización para revisar las cámaras.

En el momento en que vio al Cloro saliendo caminar, ella le gritó que se “mandó una cagada”. Al Tuta y al Cloro los conoce desde niños.

A la **defensa** manifestó que el Cloro es el Daniel. Solo lo vio caminar ese día. No fue a declarar a ningún lugar, pero cuando fue la PDI les dijo lo que vio. Le mostraron unas fotos de un celular y preguntaron si “conoce a esta persona” y ella lo reconoció y le dijeron que “estamos listos”. El Tuta era demasiado agresivo con Daniel, lo trataba mal, por eso cree que con el tiempo el Cloro iba a responder. Cada vez que lo veía le decía que le sacaría la cresta, una vez le gritó que su mama tenía Sida, etc. Sabía que en algún momento Daniel respondería.

b) PRUEBA PERICIAL:

1. MARCELO VELOSO OLIVARES, Médico Legista, domiciliada en Avenida La Paz N°1012, comuna de Independencia.

El perito declaró al tenor del Informe de autopsia N°3360-2020, de fecha 09 de diciembre de 2020. Expuso que efectuó la pericia un cadáver identificado como Carlos Barraza Martínez. Tenía tres lesiones cortopunzantes, una en la espalda al lado derecho y las principales heridas estaba situada en la zona submandibular izquierda con una lesión de cuatro centímetros y una zona excoriaria de 2.5 centímetros. La lesión mortal estaba en la zona pectoral de lado izquierdo, siendo una herida penetrante de 1,8 centímetros de largo, la cual entró por la cavidad del ventrículo izquierdo del corazón. Fue una lesión necesariamente mortal, con un trayecto de arriba hacia abajo. El toxicológico examen del occiso mostró restos de cocaína y una alcoholemia 1,59 gramos por litro.

Fiscal exhibió fotos set número cinco de otros medios de prueba del auto de apertura:

Foto 1, parte superior del cadáver de la víctima. Se ve lesión principal.

Foto 3, zona dorsal del cuerpo, con herida no penetrante.

Foto 4, rostro de la víctima, se aprecia herida submandibular izquierda, penetrante.

Foto 5, lesión submandibular izquierda de 4 centímetros, con trayectoria hacia el interior del cuello.

Foto 6, misma herida antedicha, sólo que una toma más cercana.

Foto 7, lesión principal en el hemitórax izquierdo, de 1,8 centímetros, penetrante. La herida es de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de 17 centímetros.

Foto 8, misma herida principal.

Foto 9, herida dorsal no penetrante, en zona escapular derecha, de trayecto sub cutáneo.

Foto 10, misma herida antes referida.

Foto 11, herida en cara anterior del ventrículo interno del corazón, de carácter mortal.

2. JEANETTE SAAVEDRA VIGNEAU, Perito dibujante y planimetrísta, con domicilio en avenida La Oración N°1271, comuna de Pudahuel.

La perito declaró al tenor del Informe Pericial de Dibujo y Planimetría N°83/021, de fecha 29 de enero de 2021 de Lacrim. Expuso que el ocho de diciembre de 2020 se concurre con funcionarios del laboratorio y la BH por el homicidio con arma cortante de Carlos Alberto Barraza Martínez. Concurren al CESFAM de Quilicura y se fija el cadáver. Luego se concurre al pasaje Manuel Bustos, al 0395, se fija mancha pardo rojiza y una polera, también con mancha pardo rojiza, en un vehículo.

Fiscal exhibe evidencia número cuatro de otros medios de prueba del auto de apertura.

Según la perito, corresponde al dibujo planimétrico por ella confeccionado. En la parte superior mano derecha se observa el pasaje Manuel Bustos, con un automóvil marca BID en cuyo interior se fijó la porra y, más abajo, se observa el lugar donde se fijó otra mancha pardo rojiza, en la vía pública. .

3. FABIOLA BIZAMA AVALOS, perito de sonido- audiovisual, domiciliada en Avenida La Oración N°1271, comuna de Pudahuel.

La perito declaró en relación con su informe pericial de sonido-audiovisual N° 485/021, de fecha 7 de julio de 202. Se hizo, explicó, una mejora de imágenes y cuadro gráfico y edición del video, habiéndose realizado solo la segunda operación a partir de un cuadro cronológico.

Fiscal exhibe a la perito otros medios de prueba, número nueve, correspondiente a grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en Pasaje Manuel Bustos 407, Quilicura. Explicó la perito que estos videos se cortan para juntar cronológica y ordenadamente lo que se ve en las cámaras, conforme al día y hora de las imágenes. Fueron seis cámaras.

4. VIVIAN BUSTOS BAQUERIZO, Médico Legista y Criminalista, domiciliada en Maule N° 40, comuna de Santiago.

La mencionada perito declaró con relación a su Informe Pericial de Análisis N° 1780-2022, de Labocar. Refirió que en marzo de este año realizó un análisis de antecedentes documentales referidos a la naturaleza y dinámica de las lesiones de la víctima y si acaso había señales de lesiones defensivas. Se analizó el cadáver en el centro asistencia, el sitio del suceso con la presencia de una mancha sanguínea aproximadamente de un metro cercana a un grifo y una polera con mancha de sangre con desgarraduras,

encontrada en un auto. Se consideró la autopsia, con sus lesiones, además del informe de alcoholemia del occiso (1,59 gramos por litro) y además el informe pericial genético que corroboró que las manchas de sangre eran coincidentes con perfil genético del occiso.

La naturaleza de las lesiones fue de dos tipos: excoriaciones en las rodillas y otra en el codo izquierdo. Además tenía tres heridas cortopunzantes, las tres asociadas a recorridos dentro del cuerpo. Una de ellas fue la mortal, alcanzó el corazón y generó la muerte por taponamiento cardíaco. Se trata de una situación en la cual el corazón sufre un corte, una rotura en el ventrículo. Por eso la sangre se acumula en la bolsa que cubre el corazón, lo cual lo incapacita funcionalmente. La incapacidad del afectado con una herida de este tipo no es instantánea, pues previamente hay dolor intenso. La lesión mortal coincidió con las otras dos, que tenían las mismas particularidades: una pequeña alteración en uno de sus bordes, que revela que fueron perpetradas con la misma arma, la que debió tener al menos 17 centímetros de hoja. Hubo una lesión en el cuello que afectó la glándula tiroidea y que produjo un sangrado que, sin ser abundante, fue inmediato. La lesión de la región posterior sangró poco, pues se redujo a piel y musculatura. La sangre de la lesión mortal no salió de inmediato al exterior, se acumuló primero en el saco pericárdico y cuando este se llenó, recién salió al exterior. Las tres lesiones eran coetáneas entre sí e indicaban una energía a lo menos mediana y la lesión mortal avanzó 17 centímetros en el tórax. Las lesiones eran producto de la agresión de un tercero y no había huellas de defensa en su contra, no había cortes de mano ni antebrazo. Las tres zonas afectadas eran de carácter vital, susceptibles de ser objeto de lesiones mortales.

Las determinaciones anteriores se integraron con los hallazgos en el sitio del suceso. Se consideró también el resultado de la alcoholemia del occiso, que, si bien da cuenta de una ebriedad, no hace perder la capacidad de detectar lo vivido. La víctima fue capaz de detectar la agresión y realizar gestos para reducir el riesgo desarrollando maniobras de protección. La primera lesión debió ser cervical en el lado izquierdo, no mortal, lo que explica manchas por salpicaduras al exterior de la polera. Es una herida ligeramente sinuosa, no en línea recta típica. Ello indica que el cuello tenía un pliegue, lo que revela que el afectado miraba con su cara hacia el lado izquierdo. El contexto descrito ubica al agresor a la izquierda del agredido y desde esa ubicación éste último pudo efectuar la agresión en la zona escapular. Esta última coincide con un corte en la polera, la prenda la llevaba puesta el afectado. En el lado del trecho posterior de la polera hay un corte de 20 centímetros de largo, que indica que en algún momento el agredido está de espaldas al agresor, lo que explica los movimientos bruscos de cuello que dan cuenta de la salpicadura de la prenda. Ello, explica la perito, revelaría que el agredido no enfrenta al agresor, busca una posición menos riesgosa y por eso le da la espalda. Después de eso debió generarse la lesión mortal, la cual avanza 17 centímetros al interior de tórax, de izquierda a derecha. El agresor se mantiene siempre en la misma posición, a la izquierda del afectado. No hay huellas de contención del afectado. La ausencia de huellas de defensa se entiende porque el agresor está a la izquierda del afectado y ésta es rápida para el segundo. No muy distante del charco de sangre, cerca del grifo, se produjo la agresión, pues la víctima se desplazó un intervalo breve pero luego permanecer

en el suelo generándose un charco de sangre como de un metro. La polera en el vehículo separada del cuerpo de la víctima probablemente se produjo porque se usó para contener la sangre.

En relación con la dinámica, solo el agresor tenía un arma. El agredido no portaba arma, pues más bien da su espalda para prevenir el daño y no emplea sus manos para defenderse. La relación es asimétrica, uno tiene tres lesiones cortopunzantes y otro no tiene lesión alguna. Se emplea la misma arma rápidamente en zonas vitales. No hay proporcionalidad, ni en el medio ni en el resultado.

Fiscal exhibe a la perito fotos de número cinco de otros medios de prueba del auto de apertura asociadas al informe de autopsia 3360-2020.

Foto 1, corresponde al plano anterior de la persona examinada. Se aprecia la mitad superior del cuerpo con una de las lesiones en el tórax izquierdo. Es la que hace el largo recorrido hasta llegar al corazón.

Foto 5, es la segunda lesión en la región cervical izquierda mandibular, con recorrido hacia abajo en la zona de la glándula tiroides.

Foto 6, es un acercamiento de la lesión cervical, ligeramente desordenada, sinuosa, irregular en uno de sus bordes.

Foto 7, es un enfoque de la lesión mortal en el hemitórax izquierdo cerca de la axila. Hay una pequeña anomalía en uno de los bordes, con un recorrido de 17 cm

Foto 9, muestra región posterior del cuerpo con una herida que dejó poco sangrado hacia el exterior.

c) PRUEBA DOCUMENTAL:

1. Dato de atención de urgencia N° 42213 del SAPU N°1 Rodrigo Rojas Denegri, de fecha 08 de diciembre de 2020 de la víctima Carlos Alberto Barraza Martínez, ya explicado en el contexto de la declaración de la testigo Eunice Jeanneth Cardona.
2. Certificado de defunción de la víctima Carlos Alberto Barraza Martínez, fallecido el ocho de diciembre de 2020 a las 18:30 horas, producto de una herida penetrante torácica.
3. Informe de alcoholemia 13-SCL_OH-23591-20 del Servicio Médico Legal, practicado a la víctima el 09 de diciembre de 2020, el que arroja como resultado 1,59 gramos por mil de alcohol en la sangre.
4. Informe Pericial Bioquímico practicado a la víctima N°747/021, de fecha 24 de junio de 2021 de Lacrim

d) OTROS MEDIOS DE PRUEBA

1. Set de 10 imágenes contenidas en Informe Revisión de cámaras de seguridad, contenido en Informe Policial N°4755 de fecha 09 de diciembre de 2020 de la Brigada de Homicidios.
2. 01 plano del sitio del suceso contenido en Informe Pericial de Dibujo y Planimetría N°83-2021 de Lacrim.
3. Set fotográfico compuesto por 11 fotografías, asociados a Informe de autopsia N° 3360-2020
4. Set fotográfico compuesto por 51 fotografías, contenido en Informe Pericial Fotográfico N°37/021.
5. Grabaciones de cámaras de seguridad ubicadas en Pasaje Manuel Bustos 407, Quilicura.

SEXTO: Prueba de la defensa. La defensa del acusado no ofreció prueba propia e hizo suya la del Ministerio Público.

SEPTIMO: Alegatos de clausura y palabras finales del acusado.

Fiscal reiteró su pretensión punitiva y sostuvo que la prueba fue suficiente para acreditar los presupuestos fácticos de la acusación: hay un fallecido, producto de una acción de un tercero y ese tercero fue precisamente el acusado. Los funcionarios Burgos e Illanes fueron contestes en que el día de los hechos se les llama para constituirse con ocasión de una persona que había sido agredida, llegando al lugar y constatando que un sujeto había auxiliado por personas para ser trasladado a un centro asistencial. La doctora del centro asistencial Eunice Cardona da cuenta de que la víctima llegó fallecida, corroborándolo con las fotos y refiriendo al menos dos lesiones penetrantes, identificando la de la zona torácica anterior la que le causó la muerte. Declaran los vecinos del sector, los que en su conjunto convergen hacia la participación del acusado en los hechos: los ven pelear o discutir con la víctima en el sector. Michelle Jorquera, escucha ruidos y sale y ve a la víctima en el suelo y al acusado retirándose con un arma blanca, al igual que doña Liliana Valencia que ve al acusado retirarse del lugar con un arma blanca. En los registros de grabaciones todos los testigos ven a la víctima tambaleándose y al acusado guardándose un cuchillo. Si bien ninguno vio directamente la agresión, todos vieron distintos retazos o momentos de la dinámica de los hechos que conducen a la participación de la víctima.

La **defensa** no cuestiona la participación del acusado ni la calificación jurídica de los hechos. Sin embargo, enfatiza que éste último declara y reconoce detalladamente los hechos, incluso proporcionando un contexto anterior, coetáneo y posterior a los hechos. Describe de manera precisa la agresión. Los funcionarios Campos Morales y Zamorano refieren que ninguno de los testigos dijo haber presenciado directamente los hechos. El tribunal debe considerar la colaboración del acusado, como se posiciona en el sitio del suceso, pide la atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal.

En sus palabras finales el **acusado** pide perdón, dice estar arrepentido por lo que pasó. Cometió un crimen, lamentablemente la víctima era su cuñado y no puede retroceder en el tiempo.

OCTAVO: Cuestiones fácticas a probar y su relación con los tipos penales.

En el caso *sub lite*, la imputación estatal a título de homicidio simple consumado exige, a nivel de tipicidad objetiva, que el sujeto activo del delito realice una acción idónea para provocar la muerte del sujeto pasivo de la conducta penalmente relevante y que, precisamente con ocasión de dicha conducta, se verifique el resultado típico, a saber, la muerte del sujeto pasivo en términos tales que dicho resultado sea objetivamente imputable a la acción del sujeto activo. Luego, en la esfera de la tipicidad subjetiva, la acción perpetrada por el sujeto activo debe ser de carácter dolosa, esto es, conociendo los elementos del tipo objetivo y que la acción desplegada producirá el resultado típico, es decir, ***“el autor debe prever que el resultado exigido por el tipo penal sucederá o podrá suceder, debiendo reconocer en su rasgos esenciales la forma en que su acción origina dicho resultado”*** (Hans-Heinrich Jescheck y Thomas Weigend, Tratado de Derecho Penal, Instituto Pacífico, edición alemana para Perú, 2014, Parte General, Volumen I, página 433).

Dicho lo anterior, el deber de acreditación más allá de toda duda razonable de la hipótesis imputativa por parte de los acusadores debe verificarse en relación con los elementos fácticos concretos contenidos en la acusación, los cuales están indisolublemente conectados con premisas fácticas referidas a la temporalidad, conductas específicas, espacio y contexto de la imputación. Luego, esas premisas fácticas deben ser susceptibles de subsumirse en los elementos normativos del tipo penal conforme al mandato de taxatividad consagrado en el artículo 19, N° 3 inciso final de la Constitución Política de la República. Es decir, la actividad probatoria de la parte acusadora debe inequívocamente dirigirse a la corroboración del núcleo fáctico de la acusación, transcrito literalmente en el motivo segundo de esta sentencia. Lo que se viene explicando es lo que permite satisfacer la irreductible exigencia del artículo 342 del Código Procesal Penal en orden a que la sentencia, en caso de ser condenatoria, establezca con claridad los hechos que se dan por probados en el juicio y que sirven de base a una condena, vinculando tales hechos con los medios de prueba que sirvieron para acreditarlos. Y ello, aunque resulte evidente, es lo que orienta, delimita, condiciona y determina la actividad probatoria de la hipótesis acusatoria y el subsecuente control epistémico que de dicha actividad deben realizar los adjudicadores en la esfera de la valoración probatoria.

NOVENO: Cuestiones no controvertidas o indisputadas.

Para efectos metodológicos, con la finalidad de acotar la controversia sometida a consideración del tribunal, y sin que ello implique dispensar a estos jueces del deber de motivación, es conveniente enumerar resumidamente algunas proposiciones fácticas que las partes no han controvertido y que, de hecho, subyacen de manera explícita a sus respectivas argumentaciones y teorías del caso; ***proposiciones fácticas que se derivan, además, de la prueba rendida en el juicio, la propia declaración del acusado y que a continuación someramente se valora y asocia a dicha premisas:***

1.- En primer término, ningún litigante ha controvertido el hecho de que **Carlos Alberto Barraza Martínez**, cédula de identidad número 14.159.586-5, falleció el día ocho de diciembre de 2020 a eso de las 18:30 horas, producto de una herida penetrante torácica. Ello quedó establecido esencialmente con el **certificado de defunción emanado del Registro Civil, y la declaración de la facultativa lo recibió ya fallecido en el CESFAM Martha Ugarte de la comuna de Quilicura, Eunice Cardona Ruiz**, a quien el fiscal exhibió el dato de atención de urgencia por ella suscrito y en el cual se verifica la descripción de la herida mortal.

2.- Lo anterior se complementa y corrobora necesariamente con la **declaración del médico legista Marcelo Veloso** quien perició el cadáver el nueve de diciembre de 2020, **concluyendo en su informe de autopsia que la víctima fallece de una herida cortopunzante, necesariamente mortal, inferida en la zona pectoral izquierda, que entró por la cavidad del ventrículo izquierdo del corazón; herida penetrante cuya trayectoria fue de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha y de 17 centímetros**. A mayor abundamiento, al mencionado perito le fueron exhibidas las fotografías del cadáver de la víctima, ya descritas en el motivo quinto de esta sentencia.

3.- Tampoco se contradijo que la agresión que condujo al fallecimiento de la víctima Carlos Barraza se produjo momentos antes en la comuna de Quilicura, concretamente en la intersección de calle Manuel Bustos con Santa Laura, cayendo la víctima frente a una botillería o minimarket. Ello quedó establecido con las declaraciones de diversos testigos civiles que, si bien no presenciaron directamente los hechos, si dijeron que vieron a la víctima momentos después de pelear o discutir con el acusado, tendida en el referido lugar al costado de un grifo amarillo en la vía pública. En esta materia, pertinente resulta aludir a las fotografías exhibidas al funcionario **Camilo Burgos**, que aprecia en estrados la mancha pardo rojiza en el grifo y a un costado de éste en el suelo, fotografía que le fuera también exhibida al policía **Zamorano Salazar**. En tal sentido, fueron de suma relevancia las declaraciones del testigo **Patricio Valencia** quien socorrió a la víctima y la llevó en su vehículo marca BYD, patente FXZF42 a un CESFAM de la comuna. El referido testigo señaló haber visto a la víctima ensangrentada en el suelo, mientras su hermana Liliana Valencia lo trataba de ayudar. Sobre este punto, es relevante enfatizar que al testigo en cuestión **le fueron exhibidas fotografías de su vehículo en el cual trasladó a la víctima y, en su interior en la parte trasera, la polera celeste ensangrentada que la víctima vestía ese día**, según se aprecia en los videos del local comercial de Santo Domingo 407, en los cuales Liliana Valencia precisamente indica a dicha víctima, al igual que **Michelle Jorquera** y **Nardo Díaz**. **Michelle Jorquera**, también vio a la víctima en el suelo, mientras Liliana Valencia lo ayudaba. Expresamente dijo que estaba afuera de la botillería, al lado de un grifo, cuando Liliana y Patricio lo suben al vehículo de este último. **Erik Labrín** también afirmó que el día de los hechos vio a la víctima tendida al lado de un grifo afuera de la botillería. Además, los testigos mencionados también afirman que momentos antes vieron y oyeron al acusado y víctima discutiendo o peleando. Como fuente de corroboración de lo dicho, también declaró **Liliana Valencia**, quien el ocho de diciembre de 2020 mientras trabajaba en la botillería fue

alertada de que en el exterior había una persona que había sido lesionada, saliendo y constatando que, a mano derecha, había un hombre que sangraba producto de cortes, procediendo a ayudarlo. Adicionalmente, a los referidos testigos **les fueron exhibidas las fotografías del sitio del suceso**, donde se divisa el minimarket en Manuel Bustos 407, con Santo Domingo. El sitio el suceso y lugar referidos no sólo se corroboraron con las fotografías aludidas en un motivo precedente, sino además con las exposición de la **perito Jeannette Saavedra**, a quien el persecutor estatal exhibió el dibujo planimétrico por ella efectuado, explicando la mencionada perito detalladamente que corresponde al pasaje Manuel Bustos.

4.- Con relación a la polera celeste que la víctima vestía aquel día y que fue exhibida a Patricio Valencia en los términos indicados en el apartado anterior, es relevante precisar que dicho objeto fue incautado desde dicho vehículo por los agentes policiales, a quienes también se exhibieron fotografías tanto de la prenda, como del vehículo de Patricio Valencia. En efecto, así se infiere no solo de las declaraciones de Liliana y Patricio Valencia, sino también de lo dicho por los funcionarios policiales **Camilo Burgos y Javier Campos Morales** quien, además de fijar fotográficamente el sitio del suceso, levantó dicha prenda de vestir, fijándola fotográficamente; fotografías que fueron exhibidas a ambos declarantes según se explica en el motivo referido a la descripción de la prueba de cargo. En este punto, a efectos de establecer que la víctima vestía dicha prenda al momento de la agresión, es imprescindible aludir a la declaración del funcionario **Zamorano Salazar**, a quien se le exhibe la referida polera fotográficamente, la cual -describe- tiene manchas pardo rojizas y desgarraduras, tanto en la anterior como posterior. Lo dicho permitió de manera inequívoca racionalmente concluir que la víctima el día de los hechos vestía dicha prenda celeste o turquesa, la que al ser incautada presentaba sangre y desgarraduras, conclusión pacífica y no controvertida por la defensa a partir de las declaraciones de testigos e imágenes aludidas.

5.- Por otro lado, todos los testigos civiles antes referidos conocían al acusado como el “Cloro” o “Clorito” y a la víctima como el “Tuta”, a lo cual debe agregarse en igual sentido a Nardo Díaz quien los vio ese día peleando. En esa perspectiva, el propio acusado declaró en estrados que su apodo era “Cloro” o “Clorito” y que la víctima, Carlos Barraza, se apodaba el “Tuta”. En tal sentido, importante resulta el hecho de que a **Liliana Valencia** se le exhiben videos registrados desde las cámaras de seguridad de su local comercial en Manuel Bustos, logrando divisar precisamente al Tuta con una polera celeste en el exterior, enrollada hacia arriba y aparentemente herido, desestabilizado, al tiempo que también ve al Cloro, con polera negra, retirándose del lugar. Si bien en momento alguno de las tomas se puede apreciar a ambos sujetos juntos, se pudo determinar que la secuencia de lo exhibido se verificó en un mismo contexto espacio temporal, lo que quedó establecido con la declaración de la **perito Fabiola Bizama Avalos**, que explicó que realizó el informe pericial de sonido y audio visual N° 485/21, editándolo a partir de un cuadro cronológico, videos que le fueron exhibidos y que la perito justificó que se juntan cronológica y ordenadamente, según el día y hora de las imágenes. Lo dicho debe ser complementado con la declaración del funcionario policial **Campos Morales**, quien refirió en estrados que le correspondió, estando de turno el día de los hechos, entre otras cosas

levantar las cámaras de seguridad de la botillería ubicada en Manuel Bustos, y que serán explicadas con mayor detalle en el motivo ulterior.

Las premisas fácticas antedichas, no controvertidas por la defensa e inferidas por estos jueces a partir del ejercicio valorativo brevemente explicado, permiten en rigor arribar a **tres conclusiones preliminares** conectadas con la hipótesis factual de la acusación estatal: **Primero**, el elemento objetivo del delito, es decir, el resultado típico referido a la muerte del sujeto pasivo del tipo penal ha quedado establecido, pudiendo afirmarse irrefragablemente que se trata de Daniel Alejandro Ramírez; **segundo**, la causa de dicha muerte también quedó establecida con las evidencias reseñadas, pudiendo estimarse que se trató de una herida cortopunzante que afectó el ventrículo izquierdo del corazón, sin perjuicio de otras lesiones que fueron descritas por los facultativos Cardona, Veloso y Bustos; y, **tercero**, el hecho se produjo en las cercanías o a pocos metros de la botillería ubicada en Manuel Bustos 407 de la comuna de Quilicura, el ocho de diciembre aproximadamente a las 18:00 horas, consignándose el fallecimiento de la víctima a eso de las 18:30.

En consecuencia, la cuestión central reside en la determinación de la participación penalmente relevante atribuida al acusado Ramírez Bruna.

DECIMO: Declaración del acusado y valoración de la prueba de cargo.

Tal como se adelantó en el veredicto de fecha 30 de noviembre de 2022, este Tribunal, por unanimidad, consideró que la prueba rendida por el Ministerio Público (**parte de la cual ya fue analizada en el apartado anterior**), unido a la declaración del acusado, resultó satisfactoria para generar convicción más allá de toda duda razonable en los términos del artículo 340 del Código Procesal Penal, en relación con la participación que a Ramírez Bruna se le atribuye en los hechos materia de la acusación, específicamente el homicidio simple consumado en perjuicio de Carlos Alberto Barraza Martínez .

Conviene previamente explicitar que la evidencia testimonial, pericial, fotográfica y los videos ha sido ya en parte aludida en el motivo anterior a propósito de los hechos que se han establecido con meridiana claridad y que, en todo caso, han sido en lo pertinente objeto de un ejercicio valorativo. Las premisas fácticas referidas en el motivo anterior, conforme a lo expresado en el mismo, se conectan de un modo meridianamente armónico y convergente con las aludidas probanzas cuya competencia epistémica ha permitido acreditarlas o corroborarlas.

Por otro lado, **para acreditar específicamente la participación del acusado, resulta ineludible hacernos cargo en este apartado de la relevancia de su propia declaración**, cuya síntesis se expresa en el motivo cuarto de esta sentencia. Es absolutamente efectivo que el inciso final del artículo 340 del Código Procesal Penal impide condenar a una persona con el solo mérito de su declaración. Sin embargo, de ello no se sigue de manera alguna que dicha declaración o confesión no pueda reunir un carácter epistémicamente relevante en la conformación de la decisión. De otra forma, no se explica que la colaboración sustancial al

esclarecimiento de los hechos pueda incluso configurar una atenuante que incida favorablemente en la medición judicial de la pena, es decir, una confesión puede ser considerada para compensar punitivamente al acusado que la realiza. De lo que se trata, en un modelo acusatorio en el cual el Estado tiene el peso de la prueba o el *onus probandi*, es de evitar los incentivos perversos inherentes al viejo sistema inquisitivo en orden a que la imputación criminal y la subsecuente decisión de condena se construyan nuclear y esencialmente en base a la autoincriminación. Es decir, la diferencia radical entre la consideración de la confesión en uno y otro sistema reside en que mientras en el modelo acusatorio el imputado es “sujeto de derechos”, en el inquisitivo es “objeto de prueba”. De ahí que en el modelo inquisitorial la confesión haya sido la “reina de las pruebas” y que buena parte de los esfuerzos del aparato estatal de persecución y juzgamiento penal se orientara a obtenerla.

Establecido lo anterior, una declaración del acusado prestada en un contexto de garantías confiable, verificable y efectivo como ha sido en este caso (en un juicio oral, público y contradictorio ante un tribunal imparcial, en presencia de su defensor y en pleno conocimiento de sus derechos) puede y debe ser considerada, ponderando su entidad en concordancia con los demás medios de prueba producidos en el juicio. En la declaración en comento, el acusado proporciona de por sí antecedentes relevantes. Se sitúa en sitio del suceso, describe los hechos espacio temporalmente de manera coincidente con la acusación y proporciona un contexto relevante que, sin estar descrito en la acusación, contribuye a comprender de mejor manera lo sucedido: conocía a la víctima (lo llama cuñado), quien era la pareja de su hermana y dio cuenta de desavenencias previas, lo que incluso fue corroborado, lo que fue incluso corroborado por la testigo **Liliana Valencia** quien declaró en el contraexamen que *“el Tuta era agresivo con Daniel, lo trataba mal, le decía que le sacaría la cresta...”*. El acusado describió en su declaración la dinámica de los hechos y el lugar en que mató a la víctima. Incluso, proporcionó detalles del arma utilizada (un cuchillo con una hoja de 6 u 8 centímetros, especificando que lo tiró al pasto en un pasaje). De la sola consideración de la declaración del acusado sintéticamente replicada en el motivo cuarto, se desprende de manera palmaria que su relato se coindice esencialmente con el núcleo fáctico de la acusación y, aún más, con las demás evidencias producidas en juicio que han cumplido una función de complementariedad epistémica y corroboración fáctica.

Conjuntamente con la declaración autoincriminatoria del acusado, a lo cual deben agregarse las pruebas analizadas en el motivo anterior, los dichos de los testigos civiles fueron también determinantes para conformar la decisión del tribunal. Complementando lo ya dicho en el motivo precedente, vale la pena aludir a algunas referencias importantes que tienen relación con la acción perpetrada por el acusado. En tal sentido, los videos y fotogramas obtenidos del local o botillería de Manuel Bustos 407 fueron relevantes en orden a situar tanto a la víctima como al acusado en el sitio del suceso el día de los hechos. Si bien es cierto que en tales videos no se observa un registro directo de los hechos relatados por el propio acusado, si se proporciona información fuertemente corroboradora. Esa información no sólo se infiere a partir de la presencia de ambos en las afueras de la botillería, sino de situaciones tales como el hecho de que la víctima vestía la

polera celeste descrita por los testigos civiles que lo reconocen en las imágenes (**vid** motivo anterior) y, muy particularmente, la circunstancia de que el acusado, el “Clorito”, es visto por la testigo **Liliana Valencia** que sale desde el interior del local y le grita que “*se mandó una cagada*” al tiempo que éste se retira desorientado del lugar, es decir, no sólo lo divisa en las imágenes sino que lo ve ahí, retirándose del lugar mientras la víctima yacía en el suelo sangrando. La propia testigo ve que la polera celeste del Tuta estaba botada y ella la usa para enrollársela en el cuello. Lo dicho debe ser concatenado con lo declarado por la testigo **Michelle Jorquera** quien el día de los hechos refirió haber visto al Tuta en el piso siendo auxiliado por Liliana y al Cloro caminando en dirección hacia Santa Laura, a lo cual debe añadirse que tanto **Erik Labrín** como **Nardo Díaz** vieron momentos antes al Cloro discutiendo o peleando con el Tuta. De hecho, según lo declarado por el funcionario **Zamorano Salazar**, la testigo **Michelle Jorquera** le habría indicado en su declaración policial que se percató que el Cloro mantenía un cuchillo en el bolsillo posterior del pantalón cuando se retiró del lugar, mientras la víctima yacía ensangrentada en el suelo. Si bien ese detalle específicamente no lo reitera Michelle Jorquera en el juicio, en el video (cámara de seguridad del local de Manuel Bustos 40, contenido en el número nueve de otros medios de prueba del auto de apertura), exhibido al funcionario **Javier Campos Morales**, se observa al acusado individualizado por los testigos según se explicó en el motivo anterior, pasando por ahí, sacándose un jockey, **y con lo que aparenta ser un elemento cortante en su mano, guardándolo en su bolsillo posterior**, lo que a todas luces dota de un potente grado de confiabilidad a lo dicho por **Campos** en tanto testigo de oídas lo que le habría expresado Michelle Jorquera. Por su parte la testigo **Cinthya Contreras Herrera**, funcionaria policial, entrevistó a los testigos **Patricio Valencia** y presenció la declaración de **Liliana Valencia**, quienes efectúan en su presencia relatos similares a los entregados en el juicio verificado en este tribunal, con la salvedad que Liliana -según la funcionaria policial- también refirió en un primer momento haber visto al Cloro con un cuchillo cuando se retiraba del lugar. De nuevo, si bien eso no fue explicitado por Liliana Valencia en estrados, **en la fotografía número cuatro exhibida a la funcionaria policial, se ve al acusado con una polera negra portando algo parecido a un cuchillo en su mano izquierda (foto número cuatro), para luego guardarlo en un bolsillo posterior del pantalón (foto número 5)**. Dicha información debe, inexorablemente, complementarse con la propia declaración ya aludida del acusado en el sentido de que agredió en más de una oportunidad al Tuta con un cuchillo, el cual luego tiró al pasto en un jardín. Es decir, las declaraciones de los funcionarios policiales han contribuido a corroborar los dichos de los testigos en el juicio y, desde luego, deben complementarse con el resto de la evidencia que ha sido analizada.

Con relación a las lesiones sufridas por la víctima y que fueron descritas detalladamente por los facultativos que declararon en juicio, y con presidencia de aquella que resultó ser la causa del deceso y que ya ha sido previamente especificada, lo cierto es que también se detectaron otras lesiones con arma blanca, lo cual es -nuevamente- en general consistente con lo expresado por el acusado en el sentido de que le pegó al tuta dos veces con el cuchillo, la primera en el cuello y la segunda no recuerda donde (pero que habría sido la herida mortal según el perito que declaró al tenor del informe de autopsia, ya aludido en un

motivo anterior). La doctora **Cardona**, quien es la que primeramente examina el cadáver, señaló al efecto en su dato de atención de urgencia del día de los hechos que el occiso llegó al centro asistencia con **“evidencia de lividez generalizada, pupilas midriáticas arreactivas, cuello en región submandibular izquierda, herida de aprox. 3-4 cmt. de largo que involucra piel y tejido subcutáneo (...). Tórax con herida cortante en región de línea axilar anterior a nivel T2-T2 aprox. De dos CMT., sangrado escaso en región posterior a nivel de T2-T3, línea axilar posterior herida de aprox. 2 CMT., sin sangrado evidente. Rodillas con laceraciones bilateral, sin heridas cortantes...”**. Por su parte el médico legista **Veloso Olivares** refiere que la víctima **“tenía tres lesiones cortopunzantes, una en la espalda al lado derecho y las principales heridas estaba situada en la zona submandibular izquierda con una lesión de cuatro centímetros y una zona excoriaria de 2.5 centímetros. La lesión mortal estaba en la zona pectoral de lado izquierdo, siendo una herida penetrante de 1,8 centímetros de largo, la cual entró por la cavidad del ventrículo izquierdo del corazón. Fue una lesión necesariamente mortal, con un trayecto de arriba hacia abajo. El toxicológico examen del occiso mostró restos de cocaína y una alcoholemia 1,59 gramos por litro.”**

Lo que se describe a propósito de las lesiones es trascendente en el siguiente sentido: la víctima tenía diversas heridas en distintas partes del cuerpo. En este punto, resulta atinente lo dicho en estrados por la perito y médico legista, **Vivian Bustos**, en relación con la dinámica del hecho la cual permite concluir -en sus palabras- que **“solo el agresor tenía un arma. El agredido no portaba arma, pues más bien da su espalda para prevenir el daño y no emplea sus manos para defenderse. La relación es asimétrica, uno tiene tres lesiones cortopunzantes y otro no tiene lesión alguna. Se emplea la misma arma rápidamente en zonas vitales. No hay proporcionalidad, ni en el medio ni en el resultado”**. Es decir, no ha habido ningún elemento que permita remotamente sospechar y tener alguna duda mínimamente razonable de que el acusado pudo haber reaccionado frente a una agresión de parte de la víctima, pues la dinámica, forma y entidad de las lesiones descritas por la perito en cuestión revelan un acometimiento unilateral más, que una pelea en la cual haya existido alguna posibilidad de que el acusado haya actuado total o parcialmente motivado por el impulso de defenderse o protegerse.

Respecto del **informe del alcoholemia** practicado a la víctima y que arrojó 1,59 gramos por mil del alcohol en la sangre, lo cierto es que no tiene ninguna incidencia o relevancia epistémica para conformar la decisión del tribunal, al igual que la declaración del funcionario **Illanes Ormeño** que nada aportó en relación con lo expuesto por los otros funcionarios policiales que declararon en juicio.

Finalmente, considera el tribunal relevante explicar porque se ha omitido valorar la prueba documental consistente en el informe pericial bioquímico N° 747/021, practicado a la víctima, el cual venía incluido en el auto de apertura del juicio oral. Ello, no obstante haberse permitido en el juicio su lectura resumida por el hecho de estar consignado en el auto de apertura del juicio dictado por el tribunal de garantía competente. En tal sentido, la inclusión de prueba eventualmente contraria a las reglas que

gobiernan su admisibilidad o producción en juicio no puede, en caso alguno, constreñir al tribunal del fondo a considerarlas como si tal vulneración no existiera. Mas allá de la posición que se tenga sobre el problema enunciado en orden a no recibir la prueba que se aparta de sus reglas de admisibilidad o, por el contrario, valorarla negativamente en caso de recibirla, lo cierto es que no parece admisible sostener que ***“el tribunal de juicio oral se encuentra absolutamente atado por el auto de apertura en términos tales que no sólo está obligado a admitir la prueba ilícita sino también a valorarla y eventualmente dictar sentencia con fundamento en ella, haciendo total abstracción de una ilicitud que no le corresponde a él declarar”***. (Hernández, Héctor; “la Exclusión de la Prueba Ilícita en el Nuevo Proceso Penal Chileno”, Colección de Investigaciones Jurídicas, Universidad Alberto Hurtado, página 90). Establecido lo anterior, el informe pericial bioquímico corresponde en rigor a información consignada -para todos los efectos legales- en el registro de una actuación verificada en la etapa preliminar de investigación y, en consecuencia, no está en esa perspectiva en condiciones, -al tenor del artículo 334 del Código Procesal Penal-, de formar parte de los elementos de convicción que puede tomar en consideración el tribunal para la adjudicación penal en el juicio. En efecto, el informe pericial referido no está entre aquellos que puedan introducirse al margen del estatuto que gobierna la declaración de los peritos previsto en el artículo 329 del Código Procesal Penal, conforme al cual ***“los peritos y los testigos deberán ser interrogados personalmente. Su declaración no podrá ser sustituida por la lectura de los registros en que constaren anteriores declaraciones o de otros documentos que las contuvieren, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 331 y 332”***. Tratándose de informes periciales, solo se sustraen a dicha regla, pudiéndose incorporar directamente, los señalados en el inciso final del artículo 315 esto es, el ***“análisis de alcoholemia, de ADN y aquellas que recayeren sobre sustancias estupefacientes y psicotrópicas...”*** Los demás casos, quedan sujetos al estatuto del artículo 326 y por ende debe introducirse la información mediante la declaración el perito en el juicio. **El informe escrito del perito más bien constituye, fuera de las excepciones anotadas, un requisito de admisibilidad de la prueba pericial al tenor del artículo 314 del citado código**. En consecuencia, conforme a las reglas citadas, el informe pericial escrito en el juicio solo puede utilizarse para ilustrar eventuales contradicciones con la declaración vertida por el perito en una audiencia de juicio o refrescar memoria al tenor del artículo 332 del mencionado cuerpo legal. También, eventualmente, podría introducirse como prueba de refutación conforme al artículo 336 del Código Procesal Penal y, en último término, en el evento de verificarse algunas de las hipótesis del artículo 331 del Código Procesal Penal que excepcionalmente permiten introducir registros al margen de la regla general del mencionado artículo 334.

Sobre este punto debemos efectuar algunas consideraciones adicionales. En primer término, las normas de los aludidos artículos 329 y 334 del Código Procesal Penal que prohíben sustituir las declaraciones personales de testigos y peritos por documentos o incorporar como medios de prueba los registros que dieran cuenta de diligencias investigativas de verificadas en la etapa preliminar (salvo las excepciones previstas en los artículos 331 y 332) se encuentran, geográficamente, en el contexto de las normas del juicio oral y aluden a la actividad probatoria que se verifica precisamente durante su desarrollo. Y, en segundo lugar, la razón de

lo anterior es de suyo evidente: la referidas normas guardan relación con la tutela de principios inherentes al juicio oral como el de la inmediación, contradicción y la oralidad (que es algo más que la mera verbalización o exhibición de actas, pues constituye un ejercicio dialógico y contradictorio), los cuales deben imperar y resguardarse tanto durante la fase de admisibilidad de evidencias en la etapa intermedia, como en el desarrollo mismo del juicio. En tal sentido, puede con toda propiedad sostenerse que los registros de las declaraciones obtenidas en la etapa de investigación **o los informe periciales (salvo las excepciones legales)** abarcados por las prohibiciones de las reglas legales en comento no son, en estricto rigor, “pruebas”, son registros, a tal punto que el propio artículo 334 del Código Procesal Penal señala que “*no se pueden incorporar o invocar como medios de prueba*”, salvo, claro está, que se configure alguna de las hipótesis del artículo 331 o, excepcionalmente, que se esté en presencia de algunas de las hipótesis del inciso final del artículo 315, casos en los cuales los registros y (o) informes policiales normativamente pasan a tener la cualidad merecedora de una “prueba”. Lo expresado resulta por lo demás consistente con lo prevenido en el artículo 295 del Código Procesal Penal, conforme al cual la libertad de prueba es sin perjuicio de que los medios sean incorporados en conformidad a la ley, lo que, tratándose de las declaraciones del imputado, de testigos y peritos debe verificarse conforme a los artículos 326 y 329 del Código Procesal Penal. De hecho, tanto es así que el autor citado (Héctor Hernández) , si bien se aparta de la tesis que permitirá al tribunal oral “excluir prueba” (sin perjuicio de no valorarla), tratándose del artículo 334 del Código Procesal Penal considera que se está frente a una situación excepcional que, incluso, permitiría al tribunal derechamente no recibir la prueba. En este juicio, el tribunal fue más laxo y permitió la rendición de la “prueba”, absteniéndose sin embargo de considerar la información contenida en el registro audiovisual a efectos de la conformación la decisión adjudicataria.

Para ir cerrando la valoración de la prueba de cargo, a propósito de lo precedentemente dicho en este motivo, la corroboración de las premisas fácticas de una hipótesis acusatoria supone que la prueba de cargo este desprovista de ripios, inconsistencias, vacíos, contradicciones relevantes que, (de no mediar explicaciones convincentes), afecten la coherencia y competencia epistémica del conjunto de las evidencias destinadas a acreditar más allá de toda duda razonable los hechos que configuran la acción penalmente relevante contenida en la acusación; exigencias ineludibles para que una sentencia condenatoria pueda satisfacer los requisitos de la regla del artículo 342 del Código Procesal Penal. Lo dicho (a propósito de las declaraciones del acusado, los testigos civiles y funcionarios policiales, se vincula con la **fiabilidad externa** de un relato lo cual, más que con la credibilidad intrínseca del testimonio; dice relación con su fiabilidad asociada a las demás pruebas rendidas en el juicio. Esa concatenación armónica de las pruebas rendidas es ostensible en el caso *sub lite*, a partir de una simple mirada global y entrelazada de la declaración del acusado, la prueba testimonial, pericial, fotográfica, audiovisual y documental. Tal conclusión a la que se ha arribado, demanda en el ejercicio valorativo, no sólo la consideración individualizada o compartimentada de las piezas probatorias (**atomista**), sino también una aproximación de manera global, entrelazada y sistemática (**holista**) de toda la prueba, precisamente, con la finalidad de corroborar, desestimar y (o) refutar

los hechos de la acusación con fuentes de información diversa y complementaria. Y esa corroboración, entendida como suficiencia probatoria en el caso de una imputación criminal, ***debe exceder la simple valla de una sospecha, incluso, una de carácter vehemente, que es precisamente lo que han logrado el Estado junto al acusador particular en este caso.***

DECIMOPRIMERO: Hecho acreditado y participación.

Las consideraciones expuestas en esta sentencia, en particular las contenidas en los considerandos, cuarto, noveno y décimo, permiten tener por acreditado que ***el día 8 de diciembre del 2020, aproximadamente a las 18:00 horas, mientras la víctima, Carlos Alberto Barraza Martínez, se encontraba en el sector de las calles Manuel Bustos con Santa Laura de la comuna de Quilicura, fue abordado por el acusado DANIEL ALEJANDRO RAMÍREZ BRUNA, quien portaba un elemento cortante tipo cuchillo con el que le propinó puñaladas al ofendido, una de las cuales penetró la zona pectoral del lado izquierdo, ingresando por la cavidad del ventrículo izquierdo del corazón, provocándole la muerte.***

Hechos que el tribunal, según lo latamente explicado, ha calificado como constitutivo del delito homicidio simple consumado en perjuicio de **Carlos Andrés Barraza Martínez**, habiéndose además establecido la participación material directa de **Daniel Alejandro Ramírez Bruna** en el hecho, conforme a su propia declaración y, además, a las evidencias latamente expuestas y analizadas.

DECIMOSEGUNDO: Estándar probatorio a la luz de la decisión condenatoria.

El estándar probatorio opera sobre la base de decidir fundadamente si, considerando la prueba y los elementos de juicio incorporados en el proceso penal, es posible o no justificar externamente la concurrencia de la hipótesis acusatoria o si, por el contrario, dichos datos probatorios resultan insuficientes para satisfacer el estándar establecido por el legislador en el artículo 340 del Código Procesal penal.

Dicha suficiencia probatoria, para probar la culpabilidad, debe satisfacer -siguiendo a Jordi Ferrer- dos condiciones conjuntamente: ***“1) La hipótesis debe ser capaz de explicar los datos disponibles, integrándolos de forma coherente, y las predicciones de nuevos datos que la hipótesis permita formular deben haber resultado confirmadas. 2) Deben haberse refutado todas las demás hipótesis plausibles explicativas de los mismos datos que sean compatibles con la inocencia del acusado, excluidas las meras hipótesis ad hoc”.*** (Ferrer Beltrán, Jordi, La Valoración Racional de la Prueba, Editorial Marcial Pons, pág. 147). En el caso que nos convoca, el Estado logró acreditar más allá de toda duda razonable los presupuestos centrales de su hipótesis acusatoria, con total presidencia de que no se haya verificado una defensa afirmativa con hipótesis alternativa.

La razones expuestas y habiendo valorado la prueba incorporada al juicio de conformidad lo dispone el artículo 297 del Código Procesal Penal, permiten al tribunal llegar a la conclusión de que se ha cumplido la exigencia del artículo 340 del citado cuerpo legal en orden a que la decisión de condena debe satisfacer el

umbral de una convicción, más allá de toda duda razonable, de que al acusado Daniel Alejandro Ramírez Bruna le ha cabido participación en los hechos penalmente relevantes contenidos en la acusación referidos a un homicidio simple consumado.

DECIMOTERCERO: Consideraciones acerca de la determinación de la pena.

El **fiscal**, en el contexto de la audiencia del artículo 343 del Código Procesal Penal, incorporó el extracto de filiación del sentenciado, en el cual se consignan las siguientes condenas:

- . Causa RIT 667-2016, con sentencia condenatoria emanada del Juzgado de Garantía de Carahue, de 12 mayo 2017, condenado a 541 días de presidio menor en su grado medio por el delito de robo en lugar no habitado consumado, pena remitida.
- . Causa RIT 796-2016, del Juzgado de Garantía de Carahue, condenado por el delito de microtráfico el 12 de mayo 2017, a 541 días, pena remitida.

Además, el Ministerio Público no se opuso a que se reconozca al sentenciado la atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal, pues el acusado entregó mayor certeza con su declaración. Pide la pena de 10 años y un día de presidio mayor en su grado medio.

La **defensa** por su parte solicitó que la atenuante del 11 numero 9 se califique conforme lo dispone el artículo 68 bis del Código Penal, solicitando una pena que siendo de carácter efectivo, se fije en cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo.

Atendido el debate verificado, tuvo el tribunal en consideración lo siguiente para la medición judicial de la pena:

1.- En primer término, en cuanto a la atenuante del artículo 11 número 9 del Código Penal, es decir, el haber colaborado sustancialmente el acusado al esclarecimiento de los hechos, está el tribunal no ha podido menos que concordar con los litigantes en que dicha aminorante debe ser reconocida, cuestión que el propio órgano persecutor ha concedido en sus argumentaciones finales sobre la determinación de la pena.

2.- Que, en consecuencia, en la especie concurre una circunstancia atenuante y ninguna agravante, al tenor de la acusación y del propio extracto de filiación del acusado que se ha tenido a la vista.

3.- Por lo tanto, formalmente se está en la hipótesis que de conformidad al artículo 68 bis del Código Penal es posible debatir la calificación de la atenuante reconocida y, con ello, rebajar en un grado la pena fijada por ley al delito.

4.- Sobre este punto, de la simple lectura de la sentencia y, en particular, de la declaración del acusado y las consideraciones efectuadas por el tribunal para otorgarle un peso inusualmente relevante en la conformación de la decisión adjudicataria de condenarlo, es posible concluir que la colaboración sustancial constatada en la especie merece ser calificada en los términos invocados por el defensor, por lo que se

accederá a la rebaja de la pena en un grado. En efecto, y resultando ocioso repetir lo dicho en el motivo referido a la valoración de la declaración del acusado y la prueba de cargo, lo expuesto por el imputado en el juicio dio cuenta de información de suma importancia referida a la acción por él desplegada y que, en rigor, no fue objeto de pruebas directas. Salvo, claro está, su propia declaración. Las evidencias de cargo sin duda fueron relevantes para acreditar la hipótesis acusatoria. Sin embargo, haciendo un simple ejercicio de supresión mental hipotética de la declaración del acusado, es posible concluir que la carga argumentativa para epistémicamente sostener una decisión de condena se habría enfrentado a mayores obstáculos y dificultades, pues la prueba del Ministerio Público, siendo importante, tuvo un carácter indiciario e indirecto que se vio ostensiblemente corroborada y robustecida con la declaración del acusado. Sostener lo contrario, conllevaría una interpretación del artículo 11 número 9 del Código Penal (modificado en este punto el 31 de mayo de 2002 por la ley 19806) propia del régimen de valoración probatoria del Código de Procedimiento Penal de 1906, exigiendo un estándar (a efectos de la calificación del artículo 68 bis) de “plena prueba” incompatible con la prohibición que el actual Código Procesal Penal consagra en orden a condenar con el sólo mérito de la declaración del imputado y, desde luego, inconsistente con la actual redacción de la aminorante. Como acertadamente sostiene el profesor Juan Pablo Mañalich, ***“Bajo la antigua versión del N° 9, en cambio, la “espontánea confesión” del imputado venía en consideración, técnicamente, como medio de prueba; y más precisamente, como el único medio de prueba que sustentase la comprobación judicial de su intervención en el hecho a título de autor, partícipe o encubridor. (...) En cambio, la relevancia del comportamiento procesal del imputado con efecto potencialmente atenuante bajo el N° 9 del art. 11 quedaba precisamente definida por su significación probatoria cualificada, en el sentido recién indicado.”*** (Mañalich, Juan Pablo; El comportamiento supererogatorio del imputado como base de atenuación de responsabilidad; en Rev. Derecho (Valdivia) vol.28 no.2 Valdivia dic. 2015 https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-09502015000200011). Es decir, la aminorante del número 9 se articula en función de un estándar probatorio, si se quiere, de contribución epistémica por parte del acusado en el proceso. Para concluir el punto, la claridad del profesor Mañalich en el trabajo citado ahorra mayores comentarios: ***“Bajo el derecho actualmente vigente, en consecuencia, sigue siendo en el N° 9 del art. 11 del Código Penal donde se encuentra reconocida una atenuante referida a una contribución probatoriamente relevante por parte del imputado. (...) Y porque la regulación procesal hoy vigente impide que la imputación judicial del hecho punible —aun cuando la existencia de este hubiese sido comprobada por otra vía— pueda apoyarse en nada más que la declaración eventualmente prestada por la persona del imputado, parece manifiestamente equívoco identificar el fundamento de la atenuante del art. 11 N° 9 con un incentivo dirigido al imputado en orden a que este facilite el accionar de la justicia por la vía de emitir una declaración autoinculpatoria, y ya en términos tales que el carácter sustancial de la colaboración así efectuada hubiera de depender del hecho de que su declaración resulte indispensable para fundamentar la eventual decisión condenatoria”***. Lo dicho conduce a la simple conclusión de que, en el contexto normativo del Código Procesal Penal y del actual

artículo 11 número 9 del Código Penal, jamás el estándar del artículo 68 bis podría consistir en que la confesión del acusado fuera tan relevante, al punto de ser condición suficiente y única para condenar. Ergo, la calificación de esa colaboración sustancial a efectos del artículo 68 bis no está sometida a un estándar de imprescindibilidad, sino que debe ponderarse caso a caso de acuerdo con la relevancia epistémica que dicha colaboración tuvo en la conformación de la convicción jurisdiccional para condenar al sujeto pasivo de la imputación penal.

5- Considerando todo lo dicho, para la determinación de la pena debe tenerse en cuenta que se está en presencia de un delito de homicidio simple consumado cuyo marco penal a imponer, conforme a la rebaja de pena en un grado que se efectuará en razón de lo expuesto en el apartado anterior, es de presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años) Luego, concurriendo no concurriendo en ese marco ninguna agravante ni atenuante (ésta ya se consideró al rebajar la pena conforme al artículo 68 bis) , el tribunal - conforme al artículo 67 del Código Penal- está en condiciones de recorrerla en toda su extensión. Al efecto, se impondrá la pena de seis años (6) de presidio mayor en su grado mínimo, la cual a juicio de estos sentenciadores/as resulta proporcional considerando los hechos del caso y la extensión del mal causado, ya comprendido en la conminación legal abstracta del injusto penal.

6.- Con relación a los abonos que deberán considerarse en el cumplimiento de la sentencia, se estará a lo indicado en la parte resolutive de este fallo, conforme a la certificación efectuada por el jefe de Unidad de Causas de este tribunal.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 5, 7, 11 N° 9, 14 N° 1, 15 N° 1, 24, 28, 50, 67, 68 bis 69 y 391 N° 2 del Código Penal; artículos 1, 48, 295, 296, 297, 340, 341, 342, 343, 344, 348, 349 y 351 del Código Procesal Penal, SE DECLARA:

I.- Que se **CONDENA** a **DANIEL ALEJANDRO RAMÍREZ BRUNA**, ya individualizado, como autor de un delito de **HOMICIDIO SIMPLE**, previsto y sancionado, en el artículo 391 N° 2 del Código Penal, en **grado consumado** en la persona de **Carlos Alberto Barraza Martínez** perpetrado el ocho de diciembre de 2021 en la comuna de Quilicura, ciudad de Santiago, a la pena de **SEIS AÑOS (6) DE PRESIDIO MAYOR EN SU GRADO MINIMO**, más las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena. Además, **se dispone el registro de la huella genética del acusado, conforme lo dispone el artículo 17 de la ley 19970.**

II.- Que considerando por la extensión de pena impuesta y el delito por el cual ha sido condenado, el sentenciado deberá cumplir la pena en forma efectiva, reconociéndose como abono el tiempo que ha permanecido privado de libertad en la presente causa, desde el **día 03 de junio de 2021 a la fecha, 05 de diciembre de 2022**, en forma ininterrumpida, lo cual asciende a quinientos cincuenta y un **(551) días**. Ello, conforme a la certificación expedida por el jefe de Unidad de Causas de este Tribunal.

III. Que, atendido el tiempo que lleva privado de libertad y el hecho de que deberá cumplir efectivamente la pena, lo cual le impide generar recursos, se exime al condenado del pago de las costas de la causa.

Regístrese.

Redactó la sentencia el juez don ***Eduardo Gallardo Frías***.

RUC: 1900060178-3

RIT: 235-2022

CÓDIGO DELITO (702)

SENTENCIA PRONUNCIADA POR LA SALA DEL SEGUNDO TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SANTIAGO, INTEGRADA POR LAS JUEZAS, DOÑA DENISSE EHRENFELD EBBINGHAUS, DOÑA PAMELA QUIROGA LORCA Y EL JUEZ DON EDUARDO GALLARDO FRIAS.